

CONTINUACIÓN DE LA 22ª SESIÓN ORDINARIA, EL 14 DE AGOSTO DE 1901

PRESIDENCIA DEL SEÑOR BENITO VILLANUEVA

SUMARIO:—Asuntos entrados.—Se resuelve dar preferencia á la discusión del dictamen de la comisión de guerra en los proyectos de ley sobre organización del ejército, una vez que termine la del proyecto sobre montepío civil.—Proyectos de ley del señor diputado Argerich, sobre hipotecas y locación y sobre reformas del código de procedimientos en lo civil y comercial, ejercicio de la profesión de procurador, etc.—Proyectos de ley y de minutas de comunicación, del señor diputado Gouchon, relativos al clero y á las órdenes religiosas. Continúa la consideración del dictamen de la comisión de legislación en el proyecto de ley de montepío, jubilaciones y pensiones civiles.

DIPUTADOS PRESENTES

Alfonso, Argañaraz, Argerich, Astrada, Avellaneda (M. M.), Balaguer, Balestra, Barraquero, Barroetaveña, Benedit, Bermejo, Bollini, Bores, Bouquet Rollán, Bruchmann, Calderón, Cantón, Capdevila, Carbó, Carlés, Carrasco, Carreras, Casares, Castellanos (A.), Centeno, Claros, Coronado, Cullen, Dantas, Echegaray, Ezquer, Falcón, Fonrouge, Gálvez, García, Garzón, Godoy (M. E.), Gómez (C. F.), Gómez (M.), González, Gouchon, Helguera, Hernández, Iriondo (U.), Lacasa, Lacavera, Lagos, Lartigau, Leguizamón, Leiva, Loureiro, Loveyra, Machado, Martínez, Moreno, Olivera, Olmos, Outes, Pabelo, Parera (F. M.), Parera (R.), Pérez, Quintana, Roberts, Romero, Rosas, Salas, Sánchez, Santa Coloma, Seguí, Serna, Silva, Soldati, Torino, Torres, Ugarriza, Varela Ortiz, Vedia, Videla, Villanueva, Vivanco (P.), Vivanco (R.), Yofre, Zavalla.

AUSENTES CON LICENCIA

Luro, Reyna, Usandivaras.

CON AVISO

Billordo, Castellanos (J.), Ferrari, Ferreyra, Gigena, Lassaga, Morel, Palacio, Peña.

SIN AVISO

Avellaneda (F. F.), Barraza, Behderrain, Bertrés, Bertrando, Godoy (E.), Demaria, Iriondo (M.), Laferrère, Rivas, Robert, Ruiz, Santamgrina, Sarmiento, Tissera, Ugarte.

—En Buenos Aires, á 14 de agosto de 1901, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados arriba anotados, el señor presidente declara reabierta la sesión, siendo las 3 y 35 p. m.

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

—La comisión de guerra comunica que se ha constituido, no obrando presilente, en reemplazo del señor general Bosch, al señor general Capdevila.—(Al archivo.)

PETICIONES PARTICULARES

—A. J. Ballesteros Zorraquín, por sí y en representación de su señora esposa, pide el enjuiciamiento político del juez de primera instancia doctor Luis Ponce y Gomez.—(A la comisión de investigación judicial).

DESPACHO DE LAS COMISIONES

—La comisión de legislación se expide en el proyecto de ley del poder ejecutivo, estableciendo penas para la destilación clandestina de alcoholes.

—La de guerra, en el proyecto de ley del poder ejecutivo, sobre organización del ejército, y en el del señor diputado Capdevila sobre reclutamiento é instrucción de la guardia nacional.

(A la orden del día).

3318 sobre la organización del ejército y de la guardia nacional.

Ahora, señor presidente, como en la historia de los conventos se refiere que muchas personas han sido retenidas allí durante muchos años contra su voluntad, que muchas personas han sido víctimas de torturas y que muchas otras han desaparecido, á veces por la acción del crimen, creo que el estado debe velar por los derechos de aquellos que tal vez por una enfermedad mental se han encerrado en esas casas. El estado debe ir en protección de ellos, para prestarles la ayuda de las leyes, la ayuda del poder temporal. Y entonces, propongo un siguiente proyecto de ley para que las órdenes religiosas sean sometidas á inspección.

Estos proyectos, señor presidente, creo que responden á una necesidad nacional, y no dudo un solo momento que la opinión pública encontrará en ellos una interpretación genuina de sus aspiraciones y de sus deseos.

He dicho. (*Aplausos en la barra*).

Sr. Presidente — Prevengo á la barra que les son prohibidas las manifestaciones.

Todos los proyectos que acaba de presentar el señor diputado por la capital pasarán á la comisión de negocios extranjeros y culto, con excepción del que se refiere al servicio militar, que quedará reservado en secretaría, por estar comprendido en el despacho de la comisión de guerra.

RÉTIROS MILITARES

Sr. Capdevila—Pido la palabra.

La comisión de guerra, como se sabe, ya se ha expedido en el proyecto de ley presentado por el señor general Bosch, el año anterior, sobre ampliación de la ley de retiros, existente en la orden del día número 18; pero como ella ha sido recientemente integrada con dos miembros, quienes tienen el deseo de estudiar esa ley, solicito permiso de la cámara para retirar el despacho.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Habiendo asentimiento por parte de la cámara, queda retirado el despacho.

ORDEN DEL DÍA

MONTEPÍO, JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES

Sr. Presidente—Se pasará á la orden del día, continuando la discusión sobre el proyecto de ley de montepío civil.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Gómez (C. F.)—Señor presidente: había terminado mi exposición anterior, recordando á la cámara los principales elementos que deben servir de base para hacer cálculos sobre el porvenir financiero de una ley de esta naturaleza.

En resumen: me parece que demostré muy claramente, con cálculos que no podrán ser eficazmente rebatidos, que si en el plazo de treinta y cinco años, existen solamente 6500 personas que se acojan á la ley de retiros, sobre la base de que el término medio de la jubilación en el porvenir sea de 140 pesos, que sean servidas durante diez y seis años y que concluida la jubilación se otorgue una pensión del valor de 70 pesos que dure diez años, tendremos un déficit de 15.264.952 pesos. Y que si el número de jubilados, como es más probable que suceda, señor presidente, llegara á la cantidad de 8000, bajo esas mismas bases, el déficit sería entonces de 47.385.283 pesos.

Quiero insistir, señor presidente, porque no fuí suficientemente explícito en la sesión anterior, sobre el hecho de que estos cálculos de la comisión se apoyan en datos sumamente favorables para el crédito de la caja de retiros. En primer lugar, la distribución que la comisión ha hecho para ordenar la formación de estos cálculos del número de jubilados por año, es de todo punto anormal, porque supone que en la primera década, para el cálculo de 6000 jubilados, sólo se jubilarán 85 por año; en la segunda década, 214 y en la tercera década, 300. Para el cálculo de 7000 jubilados, la comisión ha supuesto 100 para la primera década; 250 para la segunda, y 350 para la tercera. Para el tercer cálculo, de los 8000 se han imaginado 114 jubilados durante cada uno de los diez primeros años, 285 anuales en el segundo período y 400 en el tercero.

Es claro que si sucediera lo que supone el señor Latzina, en el cálculo á que

me refería en la sesión anterior, que desde el principio de la vigencia de esta ley el número de jubilados fuera de 200 al año, el resultado financiero sería completamente distinto.

De modo que, señor presidente, como yo quiero exagerar los argumentos favorables al crédito de la caja, he supuesto que en el primer tiempo, para dar precisamente oportunidad á que se aglomere un fondo respetable, sólo habría un número mucho menor de jubilados que no es lo que en realidad sucederá. Este es un elemento que la cámara debe tener en cuenta para realizar un estudio meditado y prudente de los trabajos que ha hecho la comisión.

Otro de los elementos que contribuyen también á exagerar el porvenir financiero de la caja de retiro, es el término medio de las jubilaciones, que la comisión lo ha calculado, según las cuentas hechas por la contaduría del congreso, en 150 pesos y, según los cálculos de los señores Pillado y Carvalho y Tappen en 140 pesos.

Señor presidente: el término medio de las jubilaciones, según el último mensaje del poder ejecutivo, llegaba ya, el año pasado, á 135 pesos moneda nacional.

El término medio de las jubilaciones de todos los empleados de la administración, según los trabajos de la contaduría nacional, es actualmente de 120 pesos con 70 centavos, siendo el término medio de los sueldos de todos los empleados de la administración de 109 pesos con 6 centavos.

Es un hecho universalmente conocido, muy explicable, dada la naturaleza y el desarrollo que han tenido y tendrán estas jubilaciones en el porvenir; es un hecho muy conocido, de que siempre el término medio de las jubilaciones es superior al término medio de los sueldos: ¿por qué? porque los empleados que llegan á jubilarse son los que han hecho carrera administrativa y esperan.—como es natural que lo esperen, porque es lo humano, es lo que les conviene más,—es natural, digo, que los empleados públicos esperen á conseguir un buen sueldo para retirarse; y entonces resulta que el término medio de la jubilación es mucho mayor que el término medio de los sueldos generales de la administración. Por eso tenemos que ya actualmente el término medio de los sueldos es de 109 pesos y el término medio de las jubilaciones es de 120 pesos.

Es lástima que este país carezca en la

mayor parte de los casos, de antecedentes propios, de modo que tenemos que ocurrir á cada momento á observar lo que ha pasado en naciones extranjeras para pronunciarnos sobre cualquiera de las graves cuestiones que pueden afectar el porvenir financiero de esta ley. Por eso voy á dar á la cámara los datos de lo que ha ocurrido en Francia y en Bélgica sobre el aumento del término medio en las jubilaciones.

El año 76, en Francia ese término medio era de 234 francos y el año 91 ascendía ya á 871 francos.

Los empleados de aduana en Francia, que están comprendidos en lo que allí se denomina servicio activo y, por consiguiente exceptuados, por lo que obtienen la jubilación con menor edad y menor número de años de servicios, tenían el año 87, como término medio, 666 francos, y el año 93, apenas muy pocos años, después llegaba á 905 francos: es decir, que había habido un aumento en el término medio de la pensión de esos empleados en Francia de 36 por ciento.

En Bélgica, el año 86 el término medio era de 871 francos; el 91 llegó á 1171 francos.

Por eso es que digo que los cálculos que la comisión hace de que el término medio aquí será de 140 pesos, pecan por su exigüidad; y hago esta declaración para que no se pueda inculpar á la comisión de que no tuvo previsión al calcular este término medio, completamente favorable para las ideas de los que combaten el proyecto. La comisión se queda corta en sus apreciaciones.

Según un memorial que la comisión tiene, dado por altos empleados de la dirección de correos, que se han interesado mucho en la preparación de esta ley, que la han estudiado con mucha detención, el término medio que ella calcula para la jubilación en el porvenir, es de 196 pesos. Puede ser que el cálculo del correo peque de exageración, pero, por lo menos, cuando ha sido traído á la comisión, debe tomarse muy en cuenta, porque la mayor parte de esos altos empleados como la mayor parte de los agentes de la administración, son de los que sostienen que se puede sancionar una ley completamente liberal sin ningún peligro para el porvenir. De modo que es un cálculo muy conservador el que consiste en aumentar nada más que el 50 por ciento el término medio actual de las jubilaciones, lo que nos llevaría á este resultado: que en el porvenir el térmi-

no medio de las jubilaciones será de 180 pesos; como el proyecto acuerda como pensión á los herederos la mitad del valor de la jubilación, el término de la pensión en el porvenir sería de 90 \$ al mes, y no de 70, como se ha calculado en los cuadros.

Véase, señor presidente, cómo y cuánto estos dos antecedentes que la comisión suministra, la proporción en que se optará al retiro anualmente, y el término medio de la jubilación, pueden en el porvenir hacer variar esos cálculos. Es un elemento que yo recomiendo á la consideración de la cámara, porque es muy serio.

Los recursos mismos, como ya lo he hecho notar anteriormente, calculados en 3.400.000 pesos por año, son evidentemente exagerados. El descuento del 5 por ciento, y los demás recursos establecidos en la ley, es posible que no produzcan sino 3.200.000 de pesos anuales.

Otro elemento también importante, —todo en este caso hay que considerarlo con gravedad,—es la duración de la jubilación.

Está calculado en los cuadros hechos por la contaduría del congreso, que la jubilación durará 13 años. Indudablemente, es un error de la contaduría, que no entendió bien las explicaciones del miembro informante de la comisión. Pero en el cálculo de los señores Tippen y Pillado se estima que durará 16 años, para las personas que se supone empiezan á gozar de ella á los 55 años de edad.

Es mucho más el término medio probable de la vida á los 55 años de edad.

Todas las tablas de las compañías de seguros, las tablas de la experiencia americana, las tablas de la experiencia combinada, dan más: 16,86 las de la experiencia combinada, 17,40 las de la experiencia americana.

Ya hice presente en la sesión anterior, que las compañías de seguros que en Francia operan principalmente sobre seguros de vida y rentas vitalicias, han tenido que declarar que en muchos casos les daba pérdida esta operación, porque calculaban muy bajo el término probable de la vida; y las siete compañías más autorizadas de seguros sobre la vida, de Francia, han tenido que mandar formular otras tablas, de las cuales se deduce que una persona á los 55 años de edad, si es pensionista, tiene de vida probable, término medio, 19 años 4 meses, en lugar de 16 años, que es lo calculado por la comisión.

La cámara se apercibirá de la gravedad que importa este cálculo para el porvenir de la caja de pensiones; lo que cuesta pagar 3 años y 4 meses más cada una de las siete u ocho mil jubilaciones que existirán en el porvenir: eso representa muchos millones de pesos.

Asimismo, el hecho de calcular que todas las jubilaciones durarán 16 años, es también un error, porque lo que quieren decir las tablas de la mortalidad con la cifra 16,86 es que á ese tiempo la mitad de las personas de 55 años de edad habrán muerto y la otra mitad vivirán un mes, dos meses ó un año más, etc. Y hay que seguirles pagando ese tiempo el importe de su retiro.

De manera que, en realidad, los cálculos no son exactos: por este lado pecan también de exagerados en contra del crédito de la caja.

Véase, señor presidente, cómo es inconsistente el cálculo del folleto del señor Sarmiento cuando él se basa, para presentar un saldo de \$ 118.000.000 dentro de 30 años, en que los jubilados á la edad de 55 años sólo durarán 9 años.

Debo declarar también, con toda sinceridad, que en el mismo folleto hay una carta del señor Sarmiento dirigida al doctor Roberts, diciendo que se ha equivocado porque hacía los cálculos con mucha precipitación; que en lugar de vivir 9 años los jubilados, van á vivir 15.

No van á vivir 15, como él afirma, ni 16, como lo ha supuesto por complacencia la comisión; van á vivir probablemente 19 años 4 meses, como lo establecen las siete compañías francesas de seguros á que antes me he referido.

Las pensiones que se derivan de las jubilaciones que van á venir en el porvenir, están calculadas en una duración media de 10 años. Tampoco va á suceder esto. El proyecto establece como término máximo una duración de 15 años, y es una experiencia constante en nuestro país, que si se establece que pueden durar 15 años, durarán 15; si se establecen las pensiones por 20 años, durarán 20 y si se establecieran 30, durarían 30. En la mayor parte de los casos sucede eso. Todavía tenemos herederos de los guerreros de la Independencia. No se acaban nunca los herederos, en este país, cuando se les acuerda el derecho de reclamar pensión al estado!

El mismo interés de 6 %, que ha servido de norma á las cuentas de la co-

misión, como ya lo he manifestado el otro día, es un interés exagerado.

El señor Sarmiento calcula el 7 %... Los dos incurren en verdadera imprudencia.

Suponiendo que esta ley va á regir el término de 100 años, sería en realidad aventurado y descuidada imprevisión de parte del parlamento, no apreciar bien esta cuestión del interés, y calcularlo arriba de 4 ó 5 %. Además, en los cálculos del señor P. llado, hechos sobre la base de la capitalización al 6 %, no están estimados los gastos de administración. De manera, que destinando el 1 % á cubrir esos gastos, tendremos una diferencia bastante notable en los cálculos presentados, que aumentarán el déficit referido.

Y bien, señor presidente, ya me parece escuchar la observación que algunos señores diputados harán á la comisión, preguntándole: «y si la comisión cree que estos cálculos son exactos y si van á existir en el porvenir estos déficits grandes en el desarrollo económico y financiero de la caja, por qué razón ha aconsejado á la cámara que sancione este proyecto liberal, aun suponiéndolo más restrictivo que los otros presentados á esta cámara?» Por dos razones: Por una razón de política y por una razón de conveniencia, y por lo que consta en el inciso 4.º del artículo 8.º y en el artículo 59 del proyecto de la comisión. El inciso 4.º del artículo 8.º establece que la junta creada para la administración de la caja deberá elevar al ministerio de hacienda, al fin de cada ejercicio económico, una memoria completa sobre la situación de la caja, señalando los inconvenientes con que se hubiere tropezado y proponiendo las modificaciones de la ley que la práctica demostrara necesarias, especialmente las que se refieran á la proporcionalidad de los recursos que se acumulen con relación á las erogaciones que hubiesen sobrevenido ó se presuma que deban ocurrir, siempre bajo la base de que los recursos que la presente ley crea deben por sí solos bastar para llenar sus fines.

El artículo 59, tomado de muchas leyes análogas de los países extranjeros, que ha alarmado mucho sin razón, como sucede con la mayor parte de las observaciones que se han hecho al proyecto de la comisión; que ha alarmado, digo, á los empleados comprendidos en esta ley, establece que el poder ejecutivo podrá suspender por el tiempo que

juzgue necesario la concesión de nuevas jubilaciones y pensiones en el caso de que los recursos de la caja nacional no fuesen suficientes para atenderlas, dando inmediatamente cuenta al congreso y promoviendo la revisión de la presente ley.

Cuando el proyecto contiene estas disposiciones, es porque la comisión abriga, en virtud de los cálculos que le han sido presentados, los más serios, los más graves temores de que en el porvenir no bastarán los recursos de la caja para atender los servicios que la ley le encomienda. ¿No hubiera sido más natural, entonces, aconsejar una ley mayormente restrictiva? Yo lo confieso. Declaro que la comisión, en mi concepto, debió haber aconsejado una ley que estableciera que no se podían jubilar los empleados con menos de sesenta años de edad, y que en lugar del 81 % del sueldo, que en algunos casos puede llegar al 95 %, no debería darse arriba del 60 %. Pero apenas se presentó el proyecto á la consideración de la comisión, apenas se supo que la comisión se estaba ocupando de estas cosas y que pensaba establecer como límite la edad de sesenta años y que no aceptaba el pensamiento que informa fundamentalmente el proyecto del señor diputado Roberts, en cuanto establece que los empleados podrán retirarse después de treinta años de servicio con sueldo íntegro, la comisión se apercibió de que se había levantado un gran clamoreo. La mayor parte del personal administrativo, y sobre todo aquellos que están á punto de conseguir su jubilación por faltarles solamente dos ó tres años de servicios empezaron á hacer activísimos trabajos sobre los miembros de la comisión y sobre los diputados; el ministro de hacienda se vió completamente asediado por los interesados. ¿Y qué iba á suceder? Lo que hemos presenciado: que han empezado por conquistarse los favores de la prensa de la capital en su interés, que han trabajado sobre el ánimo de cada uno de los diputados para demostrarles los inconvenientes del proyecto y las injusticias no torias que él encierra. ¿Qué iba á pasar? Que el proyecto de la comisión, si era sancionado de acuerdo con esas ideas, estaba destinado necesariamente á un completo fracaso tanto más probable, cuanto ni aún ahora puede asegurarse si las mismas ideas saludables que á su nombre sostengo van á incorporarse á la legislación de retiros.

Entonces, ¿qué pensó la comisión? Recordó con sabiduría la gran norma de conducta que usó la mayor parte de su vida el príncipe de la política del siglo pasado, el fundador de la unidad alemana, el gran Bismarck, que dijo: «No se puede gobernar contra la corriente, pero se puede gobernar en la corriente.» Entonces, la comisión ha presentado á la consideración del congreso un proyecto que puede ser votado por la cámara y que á la vez prevé las necesidades del porvenir, estableciendo que tanto la caja nacional como el poder ejecutivo pueden conjurar los peligros que la comisión prevé de un desarrollo demasiado grande de las jubilaciones, presentándose entonces al congreso, como probablemente va á suceder, como sucederá seguramente, pidiendo que se corrija la ley.

Estas son entonces las razones por las que la comisión, abrigando grandes motivos de zozobra para el porvenir de esta ley, no se ha animado á ir más allá de lo que el proyecto establece, consignando en él sin embargo muchas más restricciones que las establecidas en el proyecto del señor diputado Roberts, pero no aceptando, tampoco, las ideas del señor diputado García, por que temía exponerse á una derrota parlamentaria.

En todo caso, la ley vivirá sin mayores inconvenientes y tropiezos quince á veinte años, y durante ese lapso de tiempo, la experiencia dirá al país, con la fuerza incontrastable de los hechos, quién ha estado en la verdad, y se proveerá en oportunidad á las exigencias que entonces se conozcan á ciencia cierta.

No sé, señor presidente, si la comisión habrá cumplido todo su deber resolviendo esta cuestión con criterio práctico. Yo estimo que sí, porque entiendo que los hombres de gobierno cumplen un deber político presentando lo que creen que en un momento dado únicamente puede alcanzar el voto del parlamento.

Y se me presenta ahora la oportunidad de decir bien claro, bien alto, que quien defiende los intereses de los empleados, quien se interesa mayormente por el bienestar futuro de las familias, de los herederos de esos empleados, no son señor, presidente, los que quieren que el congreso de la nación por una ley abra de par en par inmediatamente las puertas del tesoro público para conceder á los empleados la mayor faci-

dad en el retiro y altas recompensas pecuniarias.

No, señor presidente, sólo pueden pensar así los que no están completamente empapados é interiorizados en el mecanismo demasiado difícil y complicado de esta ley. Es la comisión, señor presidente, que previendo las contingencias futuras no da sino lo que es posible dar por el momento, la que se ha preocupado mayormente del interés y del porvenir de los empleados.

Y ¿por qué señor presidente, la mayoría de la comisión habría de estar en contra de los intereses de los empleados? ¿Por qué querer presentarla, como ya dije anteriormente, como una especie de harpía que se complace en aconsejar al parlamento que vote una ley que contraría todas las esperanzas de los empleados?

No, señor presidente, no hay nada más cómodo, nada más simpático que ser generoso, especialmente con lo ajeno; pero estas leyes no las pueden votar los hombres de gobierno con el sentimiento sino con la cabeza.

Y la comisión tiene la esperanza de que como al fin y al cabo no hay nada en el mundo más poderoso que la verdad, que la justicia y que la idea, se han de imponer al parlamento, á la conciencia nacional y á los mismos intereses de los empleados, estas ideas conservadoras y previsoras. (*Muy bien!*)

Hay otra cuestión verdaderamente fundamental sobre la que ya de paso, al considerar la ley francesa, llamé la atención de la cámara. Es la que consiste en esta verdadera munificencia del proyecto que reconoce los servicios prestados por los empleados hasta el presente sin exigirles la condición establecida por la ley del 53, establecida también por la ley sancionada en la provincia de Buenos Aires, que á pesar de ello ha llegado ya al más completo fracaso, (pues como los señores diputados saben es una ley que no ha podido vivir ni tres años), y que consiste en la necesidad del descuento del 5 % de un modo forzoso, como una condición ineludible para la concesión del retiro. El proyecto de la comisión, como los demás proyectos presentados á la cámara no contienen esta disposición.

Pero, ¿qué es lo que sucede? Que hay una gran parte del personal de la administración que tiene aglomerada una cantidad considerable de años de servicios y que en vez de jubilarse, como sería justo y legítimo, dentro de

treinta años, después de haber contribuido durante ese tiempo á formar el fondo de la caja con el descuento de su sueldo, se van á empezar á jubilar hoy, mañana, pasado.

El señor ministro de hacienda trajo á la comisión un cálculo, que yo reputo exacto, del cual se deducía que los actuales empleados tienen aglomerados, como término medio 15 años de servicios. Ya demostré el otro día que, según deducciones del censo levantado por el señor Latzina, en 14 años va á haber más de 3200 jubilados; luego pues, esos 3200 empleados tienen al presente 15 años de servicios prestados. ¿Cuánto importa el valor del fondo que debía haberse acumulado por la caja para atender el servicio de 15 años que tienen ya aglomerados los servidores actuales de la nación? La comisión estima que importa 37 millones de pesos; de modo que la ley empieza haciendo á los empleados actuales un regalo de 37 millones.

Acabo de recibir una carta, que la he abierto aquí, en la sesión, sobre un nuevo cálculo que pedí á una compañía de seguros. Fuí y dije: Señor, tengo ahora 40 años de edad (no es cierto; pero lo he dicho á los efectos del problema). (*Risas*). Necesito que dentro de 15 años, es decir cuando cumpla 55, me dé usted una jubilación mensual de 300 pesos y que después de mi muerte le dé á mi familia una pensión mensual de 150 pesos por 15 años. Dígame usted cuanto le tengo que pagar por mes, porque quiero hacer ese seguro.»

Es un negocio que hacen las compañías de seguros todos los días, aquí y, sobre todo, en Europa.

Aquí está la contestación: «Estimado señor: Una jubilación otorgada de aquí en 15 años á una persona que tenga entonces 55 años, por 300 pesos mensuales, (renta vitalicia), seguida por una pensión de 150 pesos mensuales por 15 años, representa un valor actual de 22,746 pesos ó un pago mensual de 179,15.»

De modo que, para hacer este seguro, cualquiera de los señores diputados que tenga la suerte de no tener sino 40 años en este momento, debería depositar en esa compañía de seguros 179,15 todos los meses.

¿Sabe la cámara cuánto van á depositar los empleados que tienen 15 años de servicios y que se van á jubilar dentro de 15 también con 300 pesos? 16 pesos por mes, más ó menos.

Véase, pues, cómo la ley que la comisión aconseja que se sancione es completamente favorable á los intereses de los empleados. ¡Si cada jubilación, por exigua que parezca, representa una fortuna dada por el estado á sus servidores! ¿Y á qué defender tanto los intereses de los empleados, si entre las afirmaciones ilevantables de los economistas se encuentra la de que los empleados del estado trabajan menos y ganan mucho más que los de la industria y el comercio?

¡Pero sería raro que fueran los empleados en su gran mayoría los que presen servicios á la nación, y nó la nación á los empleados, manteniéndolos á ellos y á sus familias comunmente más de medio siglo!

Bien, pues: es por esta razón que yo vengo sosteniendo, tal vez incomodando demasiado á la cámara, que estas cuestiones deben tratarse con una prudencia, con una sabiduría grande, completamente persuadidos de que en cualquier caso, cualquiera que sea la ley que se sancione, ha de ser siempre demasiado generosa para los empleados y demasiado pesada para la nación!

Y para abundar en opiniones y para cerrar este ya largo capítulo á propósito de los cálculos, de las fantasías, de las conclusiones verdaderamente risueñas que se sostienen por los que quieren que se sancione una ley de puerta abierta, dió así, voy á leer á la cámara la opinión, completamente moderna, de ayer, publicada hace muy pocos días en el centro de la intelectualidad de la Europa; en París, de personas que se ha dedicado á escribir libros y que tienen universal y grande reputación en estas materias. Estas son las opiniones que tenemos que seguir. Voy á leerlas, porque no hay nada más característico, ni que ciertamente seduzca más la inteligencia espíritu que el espíritu ático, la alta habilidad de los franceses, que saben encontrar siempre la palabra para pintar una situación.

Dice M. Maurice Zablet en el *Journal des Economistes*, del 15 de febrero de este año, á propósito de una obra aparecida á fines del año pasado, de Paul Soulier, sobre instituciones de retiro de las compañías férreas de la Francia—y me felicito mucho, señor presidente, de leer á la cámara este párrafo: —«Al principio todo parece fácil en materia de retiros; hay muchas rentas y pocos gastos; es la época de las ilusiones, es lo que yo llamaría la *lune de*

miel de la caisse, la luna de miel de la caja; pero el tiempo hace calladamente su obra, insensible é implacable,— como en los matrimonios,— «el número de retirados aumenta; vienen á montones, cada vez más apurados, á pedir su pensión; después de haber ascendido hasta la cima, se la descende; el encaje ha cesado de agrandarse, holo aquí francamente entumecido; no se encuentra más en estado de soportar los desembolsos.»

«Estas líneas, que el autor toma de M. Cheysson (*Rapport sur la section 14 du Groupe de l'Economie sociale à l'Exposition de 1889*) coloca la cuestión tratada en este libro bajo otros aspectos. Parece, en efecto, que debiera preocupar el porvenir de estas instituciones de retiro de las compañías de ferrocarril, puesto que, recordamos aún una opinión,—la de M. A. Picard— las entregas ó los descuentos cuyo máximo es actualmente de 11 por ciento, deberían elevarse al 15 por ciento del sueldo de los empleados, para que no hubiera de temerse que las cajas puedan sucumbir bajo el peso de cargas *écrasantes*—no hay palabra en español que pueda reemplazarla, ni yo me atrevería á intentarlo, inclinándose ante el más espiritual de los diarios de la tarde que encuentra por demás espeluznante estos términos, empleados al hablar del porvenir de estas instituciones— cuando su juego regular haya entrado en el período normal.»

Creo que cierro realmente con opiniones ilevantables este capítulo referente al desarrollo probable y á los cálculos risueños de los que creen que va á ser una de millones de dinero, para el porvenir, el funcionamiento de la caja de retiros.

Con todos estos antecedentes, la comisión ha confeccionado este proyecto de ley y, cualesquiera que sean los inconvenientes que se le puedan apuntar, no podrá merecer, señor presidente, en el debate, el de que no sea claro, lógico, ordenado y armónico y el de que no esté cada cosa en su lugar.

Empieza por decretar la creación de una caja nacional para el servicio de las jubilaciones y pensiones; declara en seguida, cuales son los funcionarios comprendidos por la ley; provee, después á los recursos, y dispone cuidadosamente su administración y su inversión; reglamenta en seguida las jubilaciones, su adquisición, su clase, su importancia y sus distinciones; hace lo mismo con

las pensiones, y concluye estableciendo los principios generales y las disposiciones transitorias que son necesarias en todas estas leyes.

Hubo, señor presidente, tres grandes cuestiones que tratar en el seno de la comisión, sobre las que no voy á detenerme, porque ya están en el concepto general de mi informe completamente dilucidadas. En primer lugar, el fondo. ¿Cuál debía ser el descuento que debía hacerse á los empleados actuales?

Había algunos que pretendían que debía descontarse más del 5 por ciento de los sueldos; pero la comisión se apercibió de lo que todo el mundo se apercibe: de que los sueldos de los empleados de la administración no son altos; que no se les puede exigir un sacrificio que los ponga en la necesidad de mendigar ó que privara á la administración, como podría suceder, de servidores indispensables que no podrían seguir desempeñando sus funciones.

Había el peligro de no poder conseguirse servidores á precios más bajos que los sueldos actuales. De modo que la comisión ha desechado completamente la idea que tendía á hacer un descuento mayor de 5 por ciento á los empleados. Estas cuestiones se rozan directamente con la cuestión de los salarios, que es muy conocida. No se puede tener, por ejemplo, vigilantes de policía, si se les reduce ahora mismo el 5 por ciento de los sueldos.

El señor ministro de hacienda declaró que el jefe de policía se le había apersonado y le había dicho que al precio en que iban á quedar los sueldos de los agentes de seguridad no se podrían encontrar vigilantes. ¿Qué es lo que sucederá? Que en el presupuesto de este año, si se hace el descuento del 5 por ciento, tendrá que aumentarse el sueldo á los agentes de policía de la capital.

De manera que, no tengo necesidad de insistir sobre eso, porque tampoco dió lugar á mayores debates. La comisión determinó que el descuento que se debía hacer á los agentes de la administración fuese del 5 por ciento.

Viene en seguida, señor presidente,—y esta sí es una cuestión interesante—la cuestión de la cuota de la jubilación.

El proyecto del señor diputado Roberts establece que á los treinta años de servicios, se debe dar el sueldo íntegro á un empleado de la administración que se retira. La comisión consideró este asunto, como era muy natural

que lo considerase una comisión de un parlamento ilustrado, sobre todo y especialmente del punto de vista moral, y llegó á la conclusión de que sería sancionar una grave inmoralidad, conceder á las personas que no trabajan la misma retribución que á las personas que trabajan. Estas cosas no hay más que enunciarlas para que se impongan á la conciencia de todo hombre. Por consiguiente, desechó absolutamente, por inmoral, el principio de acordar la jubilación íntegra á una persona que no trabaja.

La cuota de la jubilación fué muy discutida, señor presidente. La tradición del país, desgraciadamente, había sido de conceder el sueldo íntegro. Estas cosas dejan hondas raíces, que es difícil extirpar; pero después de muchas discusiones, la comisión arribó á conceder, como una magnanimidad, para el caso de retiro después de treinta años de servicios, el 2.70 por ciento por año, lo que significa el 81 por ciento del último sueldo á los empleados que han servido ese tiempo en la administración; 81 por ciento que puede llegar hasta el 95 por ciento cuando los empleados tienen más de treinta años de servicios; de modo que á los treinta y cinco años tienen el 94.50 por ciento de jubilación del último sueldo; pero en ningún caso—y así lo dispone la ley terminantemente—la jubilación podrá exceder del 95 por ciento del sueldo. Era nada más lo repito, que para conservar este principio; de que es completamente injusto é inmoral el dar la misma retribución al que descansa que al que trabaja.

He empleado el término magnanimidad, y así puede decirse, si recordamos lo que he dicho en la primera sesión respecto de lo que dispone la legislación comparada en esta materia.

Inglaterra daba, cuando tenía leyes de jubilación, que hoy no las tiene, los $\frac{2}{3}$ del sueldo, Prusia los $\frac{3}{4}$ y Austria los $\frac{5}{8}$, con treinta años de servicios, y con más de cuarenta el sueldo íntegro. Aquí tenemos con treinta y cinco años de servicios el 95 por ciento. Bélgica acuerda los $\frac{2}{3}$; los Países Bajos, los $\frac{2}{3}$; Italia, los $\frac{4}{5}$, pero sin poder pasar de ocho mil liras; Alemania, $\frac{3}{4}$; España, $\frac{3}{5}$, con veintinueve años de servicios, y $\frac{4}{5}$ con treinta y cinco años, pero sin poder pasar de diez mil pesetas. En los Estados Unidos, ya lo dije, no hay leyes de pensiones civiles: las hay solamente de pensiones militares, de

que los partidos políticos han abusado allá más que en ninguna otra parte del mundo.

Ha llegado á mi noticia que se ha rectificado el dato que yo di á la cámara anteriormente, de que ni aún en los Estados Unidos sucede lo de aquí en esto de otorgar pensiones. Pero, señor presidente, los Estados Unidos, que son una nación inmensamente rica,—hace pocos días se ha publicado el dato de que el 30 de julio último tenían en la tesorería una reserva de más de 2.500 millones de francos,—cómo se pueden comparar con la República Argentina, agobiada por el peso de sus deudas y con cajas completamente vacías!

Hay datos curiosos, que voy á dar la cámara en un momento, para que se vea que si los Estados Unidos tienen muchas pensionistas—991.519 pensionistas había el año pasado—la cantidad de la pensión en cada caso es realmente exigua. La viuda del general Grant, tengo aquí datos del año 900, y la de Mr. Garfield, tienen pensiones de 5.000 pesos al año; la de Sheridan, 2.500; ocho más, incluyendo las de Fremont, Logan, y Mc-Clellan, reciben 2.000, y otras cuarenta y cinco gozan de 1.200 pesos por año, entre las cuales se encuentran muchas viudas de generales y almirantes de la armada de los Estados Unidos. Y aquí en Buenos Aires, señor presidente, el cónsul americano Mr. Meyer, que ha sido médico en la guerra de secesión, asimilado á general, ¿sabe la cámara cuánto gana de pensión por mes? ¡25 dollars!

De manera que véase si nosotros somos ó no generosos cuando acordamos esta cantidad inmensa de pensión, con una cuota excesivamente mayor.

El último punto, señor presidente, sobre el que la comisión debatió fuertemente fué el relativo á la edad. Ninguna cuestión se ha agitado más en el seno de la comisión que la referente á la edad, porque es precisamente sobre ella sobre lo que ha insistido mayormente el señor diputado por la capital, doctor Roberts. A pesar de las palabras de su discurso, que ya tuve la oportunidad de recordar á la cámara, á pesar de que él no quiere que se jubile la gente joven, porque es un espectáculo bochornoso para el país, él ha insistido sobre la necesidad de no poner en la ley un límite de edad.

El señor ministro de hacienda, con una visión clara del porvenir, teniendo en cuenta lo que realmente se necesita

hacer en estas leyes, sostuvo hasta el último momento la necesidad de establecer como límite de edad sesenta años, tal como lo establece la ley actual.

Pero, señor presidente, la comisión tuvo que transar con el señor diputado Roberts, tuvo que transar con los reclamos constantes de los empleados que decían que era una enormidad establecer la edad de sesenta años, que era sancionar una ley de espoliación, y fijó entonces la edad de cincuenta y cinco años.

Señor presidente: ninguna cuestión puede afectar más á una ley de retiros que la referente á la edad. No se llamará demasiado la atención sobre la transcendencia que importa para el mecanismo de la ley el fijar una edad poco elevada, sobre todo, cuando lo primero que debe tener en cuenta el parlamento es la cuestión moral que no puede ni discutirse. Permitir por una ley, que ya sería una ley de asistencia, una ley de holgazanería, como lo dije en la sesión anterior; permitir, digo, que la gente joven se retire del servicio á vivir á expensas de la nación, es sancionar una inmoralidad.

Pero, del punto de vista financiero, la cámara va á saber con las tablas de mortalidad á la vista, lo que significa no establecer un término á la edad.

En primer lugar, no hay ninguna base segura para hacer cálculos; después, vamos á tener el espectáculo de gente que se jubilará á los cuarenta, á los cuarenta y dos años. No se sostendrá que se jubilarán á los cincuenta y cinco años, cuando hay cientos de empleados en todas las reparticiones públicas de la nación, en la policía, en el correo, en la administración de justicia, aquí mismo en el congreso, que han empezado á servir á los doce y á los catorce años de edad. Esos se jubilarán entonces á los cuarenta y dos, cuarenta y cuatro y á los cuarenta y cinco años de edad. ¿Y qué va á resultar?

Una persona, á los cuarenta años de edad, vive, término medio, 27.28 años; á los cuarenta y dos, 26.72; á los cincuenta, 20.18, según las tablas de mortalidad de la experiencia combinada. Las americanas dan un promedio mayor. De modo que hay esta gran diferencia en el término medio posible de la vida humana, y la edad á que se jubile el empleado tiene que influir poderosamente en el plan financiero de la ley.

De manera que este es el punto sobre el cual la comisión va á hacer una

cuestión fundamental, á tal extremo, que declara, compartiendo en esto las ideas del poder ejecutivo, que para sancionar una ley sin base de edad, para sancionar tamaña inmoralidad y tamaño peligro financiero para el porvenir, es preferible no sancionar esta ley y seguir bajo las prescripciones de la actual. El exministro Berduc lo declaró, no una, sino diez veces, y estoy plenamente autorizado por el señor presidente de la República, para decir que el poder ejecutivo insiste en estas ideas, que son realmente fundamentales.

Así es que, como he dicho, señor presidente, sobre ninguna cuestión de las que envuelve el despacho de la comisión, va á hacer ésta mayor hincapié que en la relativa á la edad de los empleados, que es la más fundamental, porque es la que se relaciona más con los intereses de los empleados del presente y del porvenir.

Con motivo de esta cuestión de la edad, han llegado á la comisión, suministradas por los mismos interesados y por el propio autor de uno de los proyectos, el doctor Roberts, las ideas más extraviadas, las ideas más erróneas sobre la vitalidad y la mortalidad en la República. Ellos sostienen, señor presidente, —sin darse cuenta del asunto y de que, al hablar así, hacen un daño al país, porque lo desacreditan,—que la gente en este país vive poco, que todo el mundo se muere joven, sobre todo cuando se trata de empleados públicos, sin embargo de que dicen, los que conocen estas cosas, que la experiencia enseña que en todas partes del mundo los empleados públicos, especialmente cuando llegan á pensionistas, no mueren jóvenes, sino que viven mayor tiempo que todos los demás.

Y digo que no se han dado cuenta de lo que sostienen las personas á que me refiero, porque no se han tomado el trabajo de estudiar el asunto, puesto que no se ha producido ningún censo, ni hay documento emanado de la autoridad que pueda hablar sobre esta materia, que no sostenga, que no pruebe que es este un país de un clima admirable.

Tengo aquí á la mano el censo municipal de la ciudad de Buenos Aires, del año 1887, levantado por el señor Latzina, que dice lo siguiente: «En el cuadro que sigue he comparado la *duración media de la vida* de los argentinos y extranjeros, y resulta que la de éstos es en general mayor que la de aquéllos y, en determinados grupos de

edades, es este exceso considerable. La duración media de la vida de los extranjeros supera á la de los argentinos, en término medio, de la manera siguiente:

De 10 años para abajo . . en 3,3 años.

» 10 á 20 años » 4,2 »

» 20 á 30 » » 3,6 »

» 30 á 40 » » 2,8 »

» 40 á 50 » » 2,0 »

» 50 á 60 » » 0,8 »

» 60 á 70 » » 0,6 »

» 70 á 80 » » 1,6 »

» 80 á 90 » » 1,2 »

«El *máximum* de este exceso, agrega el señor Latzina, se verifica á los 11, 12 y 13 años con 4,4 años, y el *mínimum*, á los 62 años, con 0,3 años. Es este resultado el mejor testimonio de la salubridad del clima que pueda tenerse. A pesar del cambio de clima, los extranjeros acusan una vitalidad mayor que los mismos indígenas!»

¿Cuál es el índice de la mortalidad de la República? El año 69, era realmente grande, de 33,8 por mil; el año 1887, de 31; el año 1898, de 17,07 por mil.

Según este censo (de la capital, me observa en voz baja el señor diputado por Salta, que tengo á mi izquierda); pero como aquí vive más del 50 % de los empleados de la administración y como, con excepción de las provincias del norte, una de las cuales representa con mucho honor el señor diputado, en las demás y especialmente en las del litoral, la mortalidad de los habitantes es casi la misma que la de la capital de la República, yo puedo invocar aquí estos datos para sostener, como sostengo, que la mortalidad en la República Argentina es casi idéntica á la de Europa, y que la gente vive lo mismo, más ó menos.

¿Qué dice este boletín demográfico de la oficina nacional, de agosto del 99? Estudia la mortalidad en Buenos Aires, y hablando de las comparaciones internacionales, refiriéndose á Berlín agrega: «De 1871 á 1875, es decir, antes que comenzara el servicio de canalización y establecimiento de cloacas, alcanzaba como término medio á la enorme cifra de treinta y dos por mil al año. De 1876 á 1895 en que empieza y se desarrolla el servicio de cloacas, la mortalidad baja de una manera gradual en concordancia con el aumento de las casas que tienen servicio sanitario, y en los últi-

mos años del período se reduce á veinte, y últimamente á diez y siete por mil, es decir, precisamente la misma proporción á que ha llegado la ciudad de Buenos Aires en 1898, á los diez años de establecidas aquellas obras.»

Y viene en seguida la enumeración de una cantidad de ciudades, de la que resulta que la mortalidad de Buenos Aires es inferior á la de Florencia, Stockholm, Copenhagen, Dresde, Hull, Roma, Amberes, Providencia, Rotterdam, Londres, Berna, Filadelfia, Ginebra, Liorna, Praga, Leeds, Leipzig, Edimburgo, Niza, Düsseldorf, Río Janeiro, París, Birmingham, Viena, Sheffield, Lyon, Nantes, Burdeos, Glasgow, Palermo, Múnich y muchas otras; y que sólo supera á la de Chicago, Gothenburgo, Lieja, Frankfort, Zurich, Montevideo, Bruselas, Basilea, Amsterdam, Berlín, La Haya, Turín y otras pocas.

«La lista anterior—dice el autor del boletín—demuestra que entre esas noventa de las principales ciudades del mundo, situadas en diversas latitudes y climas, sólo había diez y nueve cuya mortalidad anual fuera inferior, aunque solamente en uno ó dos por mil, á la de nuestra capital; una era exactamente igual y las restantes, con mortalidades más fuertes, se encontraban en condiciones mucho menos favorables.»

El último censo nacional ha practicado una investigación que según en el mismo se establece, sólo ha sido hecha en Australia: el día que, se levantó el censo en la República Argentina sólo había en cama 426 habitantes por cada cien mil. El comentario del censo dice que este dato prueba que el clima de la República es uno de los mejores en cuanto á las condiciones en que la gente vive respecto de la higiene y de la salud.

Buen, señor presidente: la comisión, transando con el señor diputado Roberts y con las ideas del señor ministro de hacienda, estableció la edad de cincuenta y cinco años como límite para el retiro, colocando así á los empleados públicos de la República Argentina en mejores condiciones de las que se encuentran en la mayoría de los países europeos como Francia, Austria, Inglaterra, Bélgica, España, Italia, Alemania, los Países Bajos y otros.

Después de esta, la única cuestión que se ha debatido con alguna detención en el seno de la comisión, ha sido la referente á las excepciones; y la comisión, por razones que daré después

cuando se haga la discusión en particular, sólo considero dignos de ser exceptuados á los empleados de policía, del cuerpo de bomberos y á los maestros de instrucción primaria. A los primeros por lo penoso del trabajo que desempeñan y porque se demostró á la comisión que un agente de policía á los cincuenta años de edad y después de veinticinco años de servicios no puede ya prestar servicios eficientes. En lo referente á los maestros de instrucción primaria, la comisión tenía que mirarlos con la mayor simpatía, porque son ellos los encargados de formar el alma nacional del porvenir; tienen un trabajo diario permanente de cinco ó seis horas y son los responsables, los directamente responsables de la formación del carácter de la juventud argentina.

Hay, entonces, grandes conveniencias de gobierno, altas razones de estado, que aconsejan cuidar de los encargados de difundir la instrucción primaria á fin de que se encuentren siempre en condiciones de suministrarla con conciencia y sabiduría.

La comisión ha visto complacida los progresos que la instrucción primaria ha hecho en estos últimos años y la manera como se ha mejorado su personal docente.

La última memoria del consejo nacional de educación dice que por la primera vez puede decir al país que el personal docente se encuentra en inmejorables condiciones, y que basta acudir á una de las escuelas para darse cuenta de los inmensos progresos realizados en esta materia. Por consiguiente, una ley que comprenda en sus disposiciones á los maestros de instrucción primaria, tiene que penetrarse de sus grandes deberes y responsabilidades; y por eso la comisión les ha acordado la excepción, determinando que ellos podrán acogerse al retiro en condiciones excepcionalmente favorables, porque se establecen tres excepciones: la primera, referente á la edad, pues en lugar de 55 años de edad pueden jubilarse á los 50; otra referente á los años de servicio: en lugar de 30 se exige 25; la última referente á la cantidad de la jubilación: en vez de 2.70 por año se jubilarán con 3.20 por ciento.

Y bien; ya anuncié en la sesión anterior que iba á hacer un paralelo entre la ley francesa del 53 y el despacho de la comisión, para demostrar una vez más—porque el paralelo está hecho

en el estudio que acabo de verificar—que no tienen razón los que presentan á la comisión como aconsejando al parlamento la sanción de una ley verdaderamente draconiana.

En primer lugar, la diferencia de edad: la ley francesa establece 60 años y 30 de servicios, mientras que el proyecto de la comisión fija 55 años y 30 años de servicios. La primera para todos los servicios activos, para las excepciones, para la policía y para la instrucción primaria, establece 55 años de edad y 25 de servicios; nosotros fijamos simplemente 50 años de edad y 25 de servicios.

La cuota de la jubilación es en Francia de las 60 avas partes del sueldo y entre nosotros sería de 81 á 95 %. Los años de servicio que establecen el sueldo medio se determinan por la ley francesa, por los sueldos de los últimos seis años de servicios; entre nosotros, el término medio se determinaría por los sueldos de los últimos cuatro años. La ley del 53, como lo he hecho notar hace un momento, hace necesario el descuento durante todo el período de los servicios; la ley argentina no exigiría este requisito: se reconocen los servicios prestados por todos los empleados de la administración.

En sexto lugar, las jubilaciones no pueden pasar en Francia de las 3/4 partes del sueldo; su monto no puede exceder de la suma de 12.000 francos para los embajadores. Los miembros de la corte de casación sólo tienen derecho á la mitad. Entre nosotros, puede llegar hasta el 95 % del sueldo. ¿Cuál es el máximo á que se podría llegar en la República? Tratándose, por ejemplo, de un miembro de la suprema corte, 22.800 pesos anuales, que importan 50.220 francos!

Véase, señor presidente, si no es una enormidad lo que la misma comisión de legislación aconseja á la cámara y si no es exagerado que se pretenda presentar esta ley como una ley desfavorable ó de expoliación para los empleados.

En séptimo lugar, los inutilizados en el servicio sedentario necesitan tener por la ley francesa 50 años de edad y 20 de servicios y los del servicio activo y de excepción 45 años y 15 de servicios. Aquí no se necesita tener ningún límite de edad; 20 años de servicios son exigidos, cuando se trata de enfermos ó de inutilizados por enfermedades contraídas en el desempeño de sus funcio-

nes y nada más. Véase, pues, si la ley argentina no se encontrará en condiciones mucho más favorables.

En octavo lugar, no se dan en Francia, según las disposiciones de la ley del 53, sino las jubilaciones y pensiones que cubran la cantidad de las que se han extinguido en el año anterior. Por este proyecto, podemos seguir indefinidamente otorgando jubilaciones siempre que haya empleados que se encuentren en las condiciones de la ley.

Y por último, las pensiones que por el proyecto de la comisión se computan sobre la mitad del sueldo, por la ley francesa lo son sobre la tercera parte; de manera que el artículo de la comisión es también más ventajoso en esta parte que el correlativo de la ley francesa.

Y si la ley francesa del 53 ha producido los resultados desastrosos que la cámara conoce, y que expuse en la sesión anterior, ¿qué es lo que va á pasar aquí!

Lo que ocurre, desgraciadamente, con mucha frecuencia entre nosotros, cuanto discutimos estas materias tan graves, es que se quiere legislar para casos particulares. El mismo miembro informante de la comisión ha sido solicitado por empleados públicos que le exponían el caso particular en que se encontraban para que se sancionara tal ó cual disposición en la forma que les convenía. Hasta miembros de la magistratura, altos y encumbrados empleados de la administración me han venido á decir: «este artículo del proyecto me perjudica en tal sentido.»

Este es un vicio nacional; esta es una herencia de la colonia; estamos acostumbrados á legislar, hay que confesarlo con dolor, pero es necesario hacerlo, ya que estamos en una época de reacción política y administrativa, estamos acostumbrados á legislar haciendo primar muchas veces los intereses particulares sobre los intereses generales y colectivos, y ese vicio, que ha perjudicado á la República, tanto del punto de vista político como administrativo, debe desaparecer cuanto antes de nuestras tendencias legislativas.

¿Acaso la orientación de la política económica del país no puede reconocer como base, en sus comienzos, en sus principios y grandes desarrollos después, tal vez los intereses de los particulares, que han actuado sobre el parla-

mento? Hemos querido favorecer la producción del azúcar; y ¿qué es lo que ha resultado? Que se exportaron melazas, por las cuales se han pagado grandes primas, como lo denunció la prensa el año pasado. Después quisimos favorecer también la industria de los vinos. No digo que no se la deba favorecer. No hay ningún hombre de estado que aquí pueda ser libre cambista en absoluto, pero los intereses de los industriales han hecho que se haya exagerado la legislación del país y que seamos proteccionistas á *outrance*, aunque expongamos al pueblo á soportar cargas inmensas de impuestos y estemos retardando inconscientemente el aumento de la población en la República.

Bien: yo creo que es el momento de llamar la atención del parlamento á fin de que se reconcentre sobre sí mismo y cumpla sus deberes sancionando esta ley, cortando en carne viva, no teniendo en cuenta los intereses personales de algunos determinados empleados, no legislando para casos particulares, sino con la conciencia puesta simplemente sobre los intereses morales, los intereses sociales, sobre el porvenir y no solo sobre el presente de los empleados públicos, para defender así los intereses futuros de la nación. (*Muy bien!*)

Ya ha visto la cámara cómo legislan sobre esta materia la mayor parte de las más poderosas naciones de la tierra.

He encontrado en el discurso del actual ministro de finanzas de Francia, contestando al del miembro informante de la comisión de presupuestos de la cámara, un extracto de la obra de Mr. Mulhall, *Dictionary of statistics*, con los siguientes datos sobre los presupuestos de las principales naciones de Europa; y los voy á dar á la cámara porque son interesantes, para que se vea cómo estas naciones legislan con tanta previsión sobre estas cosas, á pesar de tener miles de millones de renta y de dedicar gran parte de ella á los empleados, á los trabajos públicos y á obras de importancia nacional, ¡cuánta previsión, sabiduría y prudencia deberemos tener nosotros, que recién empezamos, aunque estemos destinados á un gran desarrollo en el futuro! Porque no soy pesimista sobre el porvenir de la República, en ninguna materia, ni política ni administrativa; el país ha de progresar á pesar de todos los obstáculos que se le opongan, y ha

de llegar, cuando la educación y la población de este país estén suficientemente desarrolladas, á su completo desenvolvimiento político y administrativo.

Dice Mr. Mulhall en la obra citada: «La Alemania gasta 4000 millones, en el presupuesto nacional y de los estados confederados, ó sea el 2 % de su riqueza total; Inglaterra tiene un presupuesto 3000 millones, y gasta 1 % de dicha riqueza; Francia, 3500 millones, ó 1.4 %; Rusia, 2700 millones, ó 1.7 %; Austria, 2.000 millones, ó 1.8 %; Italia, 1.800 millones, ó 2.3 %; Bélgica, 375 millones, ó 1.5 %; Holanda, 300 millones, ó 1.4 %.

La República Argentina tiene una deuda de 418 millones de pesos oro, cuyo servicio va á exigir este año 27.808,490 pesos. En el último mensaje del presupuesto se determina claramente que no hay una sola nación cuyo servicio alcance á la cifra del nuestro, aunque se puedan citar naciones que, proporcionalmente ó no, tengan una deuda mayor que la República. La carga anual está representada por el 6.54 % de la deuda nominal y el 8.5 % de lo recibido por el gobierno, cada habitante paga 6 pesos oro, y el 40 % de las entradas del gobierno se invierte en el pago de la deuda. Casi ninguna nación llega al 4 y medio por ciento en el servicio de su deuda. ¿Quién no sabe, señor presidente, que este país está oprimido por los impuestos?

Entonces, pues, en un país joven, que tiene el peligro de ver desarrollarse las cargas de las jubilaciones y pensiones, ¿por qué no ha de legislarse con sabiduría sobre esta materia, cuando ni siquiera, por falta de recursos, se pueden realizar las obras públicas más indispensables?

Cuando ni tampoco se puede atender al cuidado de la salud de la República —que lo diga el señor diputado por Salta que tengo á mi lado: la gente se está muriendo allí lo mismo que en Santiago del Estero, porque no tienen obras de salubridad, porque no tienen agua sana que beber;—en un país en el que no pueden realizarse las obras más reproductivas; cuando hace más de veinte años que la provincia de Santa Fe está reclamando el puerto del Rosario, que no puede llevarse á cabo, á pesar de la buena voluntad de los gobiernos; que tampoco pueden ejecutar la canalización de los ríos que, aquí como en todas partes del mundo, es la única manera

de conseguir los transportes baratos y que constituye uno de los problemas más fundamentales que nuestros estadistas deben tener en cuenta para resolverlos inmediatamente.

En 1871 un publicista, hablando de los pueblos sajones y latinos, presentaba á éstos completamente agobiados por el peso de sus deudas, y pronosticaba que no podrían competir con aquéllos en el comercio internacional; y, treinta años después de esto, el miembro informante de la comisión de presupuestos de la cámara de diputados de Francia decía: «Ése hecho, lejos de ser una aventurada previsión, se ha realizado.»

La Inglaterra, que sólo gasta el uno por ciento de su riqueza por este concepto, marcha á la cabeza del comercio universal y sólo la Alemania es la que puede presentarse como su rival; ¿por qué? porque se ha preocupado de resolver todos estos grandes problemas, y principalmente, los que se refieren á la navegación.

¿Qué es lo que pasa respecto de la navegación en Alemania? Que el movimiento de navegación del Elba era sólo de 575.000 toneladas el año 70, habiendo subido á más de 5 millones de toneladas en 1899; que el movimiento del puerto de Hamburgo el año 70, había alcanzado sólo á 1.500.000 toneladas, presentándonos en 1900, un movimiento superior á 20 000.000 de toneladas.

¡Es eso lo que hacen las naciones precursoras, que cuidan de su porvenir y de sus destinos!

Y bien señor presidente: la comisión de legislación, dándose cuenta de las graves responsabilidades que iba á asumir ante el parlamento al aconsejarle la sanción de un proyecto de ley que envuelve la resolución de problemas tan graves y complejos, ha creído cumplir con su deber y responder así á la confianza con que la honra y distingue la cámara, dedicando á este asunto toda su actividad é inteligencia, aun á riesgo de abusar con su informe, como efectivamente ha sucedido, tratándose de tan árido tema, de la benevolencia de los señores diputados.

Llegado al final de mi exposición, en general; y persuadidos todos con anterioridad á ella, de la alta prudencia con que un parlamento ilustrado debe votar leyes de esta naturaleza, créome escusado, en medio de una asamblea política, de hacer un llamamiento al buen sentido y á la sabiduría de la cámara, porque estoy persuadido de que, sobre todos

los sentimientos, sobre todas las preocupaciones y sobre todos los intereses, no han de prevalecer aquí sino las altas razones de estado y de previsión, que aconsejan no comprometer mayormente el porvenir de una iniciativa que va á ensayarse por primera vez entre nosotros. Es mi convicción sincera que todos los señores diputados,—lamentaría mucho equivocarme, no por la comisión, ni por mí, que ningún interés personal ni de amor propio perseguimos, ni podemos perseguir en este debate, sino por el país y por el porvenir de los empleados públicos y de sus familias,—es mi convicción decía, que la cámara ha de votar este proyecto pasando tranquila, consciente y serena por en medio de las esperanzas y expectativas ilegítimas defraudadas, porque le ha de ser más grato, colocada en una posición, desde la cual pueda observar con claridad, dónde concluye el interés privado y dónde empiezan el interés colectivo y las altas conveniencias presentes y futuras de la nación, tratándose de leyes de esta naturaleza; que le ha de ser más grato, digo, sentir la satisfacción de haber cumplido todo su deber, tal como en casos análogos lo entienden y practican los hombres de estado, que acordar concesiones momentáneas y efímeras, pero comprometedoras del porvenir á ciertos intereses presentes de los empleados públicos.

Porque la satisfacción del deber cumplido es la única compensación, la única íntima compensación á que se tiene derecho de aspirar y que puede alcanzarse en la vida, no muy grata, del hombre de gobierno.

En cuanto á mí, sintiéndome en cierta manera satisfecho, solamente por haber presentado con toda mi ciencia y conciencia las diversas facetas del problema en debate, dándole todo mi pensamiento, no abandonaría tranquilo la palabra, si antes no agradeciera á mis distinguidos colegas de comisión el honor que me han discernido al encomendarme que los representara en este interesante debate, y, principalmente, si no presentara mis sinceras y respetuosas excusas á la cámara toda, por haberme acogido durante tanto tiempo á su tradicional hidalguía.

He dicho. (*¡Muy bien! Aplausos en la barra.*)

Sr. Roberts—Pido la palabra.

Aun cuando estoy en desacuerdo con muchas de las modificaciones introduci-

das por el despacho de la mayoría de la comisión al proyecto que tengo presentado y como ellas no afectan en lo fundamental el proyecto en general, considero que la oportunidad en ponerlo de manifiesto será durante la discusión en particular.

Hago esta aclaración para explicar mi voto, que será en pro del despacho en general.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Yo necesito también decir dos palabras sobre mi firma y mi adhesión al despacho en general.

Lo he firmado casi exclusivamente por una sola razón, por aquella que consiste en que el parlamento argentino, antes de crear la ley de montepío, empezó por establecer en el presupuesto lo que se debía descontar á los empleados para la formación de dicho montepío.

No concibo bien que, á no mediar una razón de esa naturaleza, pueda sancionarse una ley de montepío sin empezar por sancionar aquello que es su fundamento esencial, indispensable: la ley general de empleos públicos, la ley que establezca el orden lógico de ascensos, que regularice los sueldos, que dentro del presupuesto argentino presenten tan extrañas anomalías; una ley como la de Alemania, calificada por todos los autores de ley magistral, la más adecuada para llenar todas las previsiones en cuanto se refiere al retiro.

Esa ley falta, y acaso la falta mayor de la presente sanción es aquella omisión.

Pero junto á estas razones fundamentales, existe la razón fundamental, de justicia, que se relaciona con la rebaja de sueldos que se hace á los empleados desde enero.

Dejo así dada la razón relativa, muy relativa de mi adhesión al proyecto en general, y repito como el señor diputado Roberts, que las someras razones que tengo, las aduciré al fundar mi disidencia en particular sobre algunos de los artículos y pedir pequeñas correcciones de otros en que no he creído necesario expresar especial disidencia.

He dicho. (*¡Muy bien!*)

Sr. Presidente—Siendo la hora avanzada se levanta la sesión.